Proceso: 053606099057 **2020-01561**
Delito: Violencia intrafamiliar
Acusado: Danny Leandro Sánchez Grajales
Procedencia: Juzgado 2º Penal Municipal de Itagüí
Objeto: Apelación de sentencia absolutoria
Decisión: Declara desierto el recurso
M. Ponente: Luis Enrique Restrepo Méndez
Auto No: 028-2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR
Medellin

SALA DECIMOSEGUNDA DE DECISIÓN PENAL

Medellín, dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Proyecto aprobado según Acta No. 122

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía 166 Local, en contra de la sentencia proferida el 26 de julio de este año por el Juzgado 2º Penal Municipal con Funciones Mixtas de Itagüí, Antioquia, por medio de la cual absolvió al ciudadano **Danny Leandro Sánchez Grajales** de los cargos en su contra formulados como autor del delito de violencia intrafamiliar agravada, donde resultó como víctima Leydi Johanna Sánchez Grajales. No obstante, al observarse en la sustentación del recurso la ausencia de una real contradicción con lo resuelto, no queda otro camino que la declaratoria del desierto.

1. HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES:

Fueron narrados así por el Juez de primera instancia:

> *"El día 27 de noviembre de 2020, siendo aproximadamente a las 07:20 horas, en la residencia ubicada en el sector de la carrera 60 N° 44B-03 Vereda Loma Los Zuleta, Municipio de Itagüí fue capturado DANNY LEANDRO SANCHEZ GRAJALES porque la policía llega hasta allí por el llamado de la señora MARIA RUTH GRAJALES, madre del mismo y narra a los uniformados como su otra hija LEIDY JOHANA SANCHEZ GRAJALES, hermana del capturado, fue lesionada por este cuando le abrió la cabeza con un casco de moto, que le generan una incapacidad definitiva de quince (15) días. Y secuelas por determinar. Indica que esta situación es frecuente que hay males tratos verbales por parte de su hijo a toda la familia, que en el hecho de ayer no estaba presente el menor que vive con ellos pero que en reiteradas ocasiones también recibe mal trato de su hermano danny (sic) y que ella también es víctima en estos hechos ya que el joven DANNY LEANDRO la maltrató de manera verbal, la policía llega al lugar la familia permite el ingreso a la residencia y allí cuando el trata de evadir a los uniformados proceden con su captura".*

El 28 de noviembre de 2020 ante el Juzgado 14 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de esta ciudad, se llevó a cabo la audiencia preliminar de la legalización de captura y conforme a la Ley 1826 de 2017 se dio traslado de escrito de acusación en el que se le acusó por el delito de violencia intrafamiliar agravada, art. 229 inciso 2º del C.P. No hubo allanamiento a cargos y se le impuso la medida administrativa descrita en la Ley 1857 de 2008 art. 17 consistente en *"abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del grupo familiar"* y la contenida en el literal D: *"obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca tales servicios a costa del agresor"*.

El conocimiento le correspondió por reparto al Juzgado 2º Penal Municipal con Funciones Mixtas de Itagüí, Antioquia, quien efectuó la audiencia concentrada el 28 de junio de 2021, el juicio oral se realizó en sesiones del 28 de noviembre

de 2023 y 26 de junio de 2024, el 26 de julio siguiente el a quo profirió la sentencia que se revisa en la que absolvió al acusado por el delito de violencia intrafamiliar agravada descrita y sancionada en el artículo 229 inciso 2º del C. P.

La fiscalía recurrió en apelación el fallo.

2. DE LA DECISIÓN RECURRIDA

Luego de hacer un recuento de la actuación procesal y las pruebas practicadas en el juicio oral, el funcionario de primer grado indicó que de conformidad con los artículos 372 y 381 de la Ley 906 de 2004, son presupuestos para condenar el conocimiento más allá de toda duda, acerca de los hechos, circunstancias y responsabilidad penal de la persona acusada como autor o participe de la conducta penal previamente endilgada, fundado en las pruebas debatidas en el juicio, sin que pueda basarse la decisión de manera exclusiva en pruebas de referencia.

Posteriormente trajo a colación el concepto de familia que la Carta Política consagra en el art. 42 y resaltó que el delito de violencia intrafamiliar tipificada en el artículo 229 del Estatuto Penal, determina que para encontrarse inmerso en este reproche el maltrato físico o psicológico debe estar dirigido en contra de cualquier miembro de su núcleo familiar, teniendo entonces como estructura dogmática un primer ingrediente normativo que hace alusión a la calidad del sujeto activo y pasivo como integrantes de un mismo núcleo familiar.

En este caso, la realidad que se ventiló en el juicio oral es que Danny Leandro y Leydi Johana Sánchez Grajales son hermanos y convivían bajo el mismo techo desde niños y hasta hace un año, por tanto, es viable señalar que entre el acusado y la víctima existió una unidad familiar. No obstante, a la hora de proceder a la valoración de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se percibieron los hechos, se tiene que la denunciante narró que el día de la ocurrencia de las lesiones, se encontraba en la vivienda que compartía con su hermano y su progenitora, arreglándose para ir a trabajar y que luego de desayunar se disponía

a llevar el plato a la cocina pero su hermano le bloqueó la puerta de la habitación impidiendo que pasara por allí, mientras le hacia la exigencia de que pidiera el favor, a lo que ella en una ocasión lo hace, luego intenta cruzar por un lado, su hermano se molesta y le pega con el casco de una moto en la cabeza, generándole una lesión que le causó una incapacidad definitiva de 15 días, acciones que eran recurrentes entre los dos hermanos.

Señaló que como estipulación probatoria ingresó el dictamen de medicina legal del 27 de noviembre de 2020 en el que la médica legista Catalina Sofía Vallejo Aristizábal, en el aparte del examen médico consignó:

> *"La evaluada ingresa deambulando por sus propios medios, observa tranquila. Alerta, orientada, colaboradora. Descripción de hallazgo:*
> *- Cara, cabeza, cuello: Herida de 1.4x0.3 cm, abierta, reciente, de bordes nítidos, sin sangrado activo, de distribución oblicua, ubicada en región frontal derecha evaluada refiere que no quiso sutura.*
> *ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES: Mecanismo traumático de lesión: Corto contundente Incapacidad médico legal DEFINITIVA QUINCE (15) DÍAS. Secuelas médico legales a determinar en posterior reconocimiento médico legal, si las hubiere…"*

Indicó que las lesiones halladas son congruentes con la narrativa de la denunciante, por lo que la existencia de las lesiones no será objeto de reproche, pues resulta evidente que las mismas existieron y fueron causadas por quien se procesa.

Adujo que los involucrados se llevan solo un año de edad, son hermanos, vivían con su progenitora, cada uno tenía su espacio, no tienen dependencia económica uno del otro, lo que permite inferir que se encontraban en condiciones de igualdad en el entorno familiar, pues no existía entre ellos subordinación alguna, aunado a que el procesado ya no reside en el inmueble, lo que ha de contribuir a que no se repitan este tipo de eventos y recordó que de conformidad con los conceptos de conducta punible y antijuridicidad que trae el código penal, debe

haberse puesto efectivamente en peligro el bien jurídico, por lo que para que se genere la consecuencia de un injusto no basta con enmarcar un comportamiento de una persona en un tipo penal, en tanto debe demostrarse sin asomo de dudas la intención y conocimiento de causar ese resultado; por tanto, es su obligación como fallador valorar si en el caso en concreto se presentó una real vulneración, pues las afectaciones leves por su simple resultado no configuran una antijuridicidad del actuar de una persona.

Consideró que el hecho denunciado responde a un incidente o confrontación consecuencia de la dinámica familiar de dos hermanos mayores de edad, presentado por la diferencia de perspectiva, motivado por el ego de no dar al otro la razón o complacer sus peticiones, también es el resultado del compartir día a día, que genera un acto disfuncional de agresión contra la señora Leydi Johana; máxime que tal y como lo expuso la misma víctima su hermano constantemente tenía comportamientos de mal genio que en aquella oportunidad hubiera podido evitarse con un *"por favor";* agregó que si bien nada justifica la violencia, ésta no tuvo la entidad suficiente para vulnerar el bien jurídico de la unidad familiar, como núcleo fundamental de la sociedad.

Refirió que a pesar de que la víctima afirmó que no era la primera vez que fue blanco de agresiones por parte del procesado, tal situación no fue acreditada.

Indicó que con las pruebas pedidas, ordenadas y practicadas por la Fiscalía no pudo demostrarse una violencia ejercida por Danny Leandro Sánchez Grajales contra su hermana y menos por su condición de mujer no se acreditó sumariamente que la existencia del pleito, encajara en la conducta que se señala, por esa razón *"es más factible afirmar que se está frente a un desorden doméstico propio de las relaciones de hermanos; lo que deja sin soporte la configuración del punible que pretende endilgársele"*, en esa medida no advierten los requisitos señalados en los artículos 7 y 381 del Código de Procedimiento Penal, para dictar sentencia condenatoria; en consecuencia absolvió, como se dijo al procesado.

3. DEL RECURSO

La Fiscalía 166 Local mostró inconformidad con la sentencia e interpuso el recurso de apelación, el cual sustentó por escrito dentro del término oportuno con miras a que se revoque el fallo proferido por el juez de instancia, y en su lugar se condene al acusado.

Estimó que este asunto quedó demostrado que el acusado, hermano de la víctima para la fecha de los hechos y desde siempre, convivió bajo el mismo techo con ésta por lo que no existe duda respecto del núcleo familiar, por tanto, la conducta desplegada por Danny Leandro en contra de su pariente encuadra perfectamente en el tipo penal de violencia intrafamiliar que tiene una pena de 4 a 8 años de prisión y por dirigirse en contra de una mujer debe aumentarse de la mitad a las ¾ partes.

Dijo que las agresiones físicas quedaron demostradas con el testimonio de la víctima quien narró claramente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron, además que éstas eran constantes sin tener conocimiento de porqué era agredida, situación que resquebrajó la armonía familiar.

Consideró que la fiscalía demostró con grado de certeza más allá de toda duda la responsabilidad del acusado.

4. NO RECURRENTES

La defensa solicitó que el recurso fuera declarado desierto por la *"indebida y tenue sustentación presentada"* por el fiscal quien no manifestó cuál fue el error en el que incurrió el Juez de primera instancia.

Agregó que, en este caso, tal y como lo concluyó el a quo no hubo afectación del bien jurídico tutelado, pues la mera captura en situación en flagrancia del usuario no refleja una responsabilidad penal y mucho menos lo estipulado frente a la

lesión ocasionada en la cabeza a Leydi Johana, de esto nada dijo el fiscal en su recurso.

Indicó que los roles que desempeñaban dentro del núcleo familiar los hermanos Danny Leandro y Leydi Johana es de peleas normales entre hermanos, sobre todo cuando regularmente se presentaban agresiones físicas entre ellos lo que daría entonces para un desorden doméstico u otro tipo penal y no así para castigar por el punible de violencia intrafamiliar.

Dijo finalmente que si la violencia ejercida por Danny Leandro a su hermana Leydi Johana, sea cual fuere el mecanismo para infligirla trae como consecuencia la afectación de la unidad y armonía familiar y estos rompen los vínculos en que se fundamenta esta estructura esencial de la sociedad, ahí si habrá antijuridicidad, cuestión, insiste que no atacó la fiscalía.

5. CONSIDERACIONES

5.1 Es competente la Sala para abordar el estudio de la decisión proferida por el *a quo*, en virtud del factor funcional determinante de la misma, consagrado legalmente en el artículo 34 numeral 1º de la Ley 906 de 2004.

5.2 El sistema procesal penal de un estado que se precie de democrático, se caracteriza por el derecho a la segunda instancia contra las sentencias. Sin embargo, no se trata de un derecho cuyo ejercicio resulte automático, pues está sometido a la satisfacción de ciertos requisitos. El primero tiene que ver con la existencia de interés para recurrir, que se nace del agravio que la decisión ocasiona a la parte que ha de impugnarla. El segundo está determinado por la interposición oportuna del recurso. Y, el tercero, por la adecuada sustentación de la inconformidad. En el asunto bajo examen se satisfacen claramente los dos primeros requisitos, dado que la decisión, de un lado, se distanció de la pretensión condenatoria de la fiscalía, es decir, rechazó su petición de condena y, del otro, esa parte interpuso dentro del término de ejecutoria del proveído el recurso de apelación. Empero, no satisfizo a cabalidad el tercero de los

requisitos. En efecto, sustentar la inconformidad no es más que exponer las razones por las cuales se considera que lo resuelto es equivocado, es decir, controvertir todos y cada uno de los argumentos considerados por el juez como soporte de su decisión. Se insiste, la controversia debe plantearse respecto de todos los argumentos tenidos en consideración por el fallador, pues dejar alguno vigente puede significar que por sí solo alcance a servir de respaldo a lo decidido. Así lo ha enseñado desde antaño la Corte Constitucional en Sentencia C-365 del 18 de agosto de 1994:

> *"No se desconoce la garantía constitucional de la doble instancia en lo referente a sentencias (C.N. arts. 29 y 31), por cuanto la exigencia de sustentación no implica negar el recurso o excluir toda posibilidad del mismo, como lo plantea la demanda.*
> ***La norma no impide al afectado recurrir, sino que, permitiendo que lo haga, establece una carga procesal en cabeza suya: la de señalar ante el superior los motivos que lo llevan a contradecir el fallo***.
> *El apelante acude a una instancia superior con suficiente competencia para revisar lo actuado, y ante ella expone los motivos de hecho o de derecho que, según su criterio, deben conducir a que por parte del superior se enmiende lo dispuesto por la providencia apelada (...) Tampoco es cierto que mediante esta exigencia se haga prevalecer el procedimiento sobre el derecho sustancial, ya que la norma acusada no conduce a la nugatoriedad o al desconocimiento de los derechos que pueda tener el apelante. Más bien se trata de que éste los haga explícitos con miras a un mejor análisis acerca del contenido de sus pretensiones y de la providencia misma; al poner de relieve los motivos que llevan al descontento del apelante, se obliga al Juez de segunda instancia a fundar su decisión en las consideraciones de fondo a las que dé lugar el recurso (...)"* (Negrillas de la Sala)

Así mismo, ha dicho la Sala de Casación Penal que: "*la fundamentación de la apelación, por el aspecto indicado, es ya un acto trascendental. No le basta al recurrente afirmar una inconformidad general frente a la providencia que*

recurre, sino que le es imperativo concretar aquello de lo que disiente presentando los argumentos de hecho y de derecho que lo conducen a cuestionar la determinación impugnada. ***Sustentar indebidamente, en consecuencia, es como no hacerlo, y la consecuencia de la omisión es que el recurso se declara desierto"*** [1] (Negrilla de la Sala).

5.3 Pues bien, en el *sub examine* el a quo encontró demostrado que: i) Leidy Johanna resultó lesionada a causa de la agresión que le produjo su hermano, ii) entre ellos, para el momento de los hechos, había unidad familiar, pues se trata de hermanos que convivían bajo el mismo techo, iii) no había dependencia económica, Danny Leandro y Leydi Johanna estaban en condiciones de igualdad en el entorno familiar, iv) como consecuencia de estos hechos el acusado ya no reside con su hermana y su progenitora, por tanto, dichos sucesos no se repetirían. De esa manera concluyó que no se puso en peligro la armonía doméstica y la unidad familiar, es decir, no se demostró la antijuridicidad material de la conducta y que a lo sumo lo que existió fue una confrontación propia de la dinámica familiar, un conflicto entre hermanos ya que el tipo de violencia ejercido por Danny Leandro no tuvo la entidad suficiente para vulnerar el bien jurídico de la unidad familiar, como núcleo fundamental de la sociedad y, en consecuencia, absolvió al acusado.

La fiscalía mostró inconformidad con la decisión de primer grado. Sin embargo, tal como se reseñara en el capítulo pertinente de este proveído, en su escrito de sustentación insistió en que demostró la existencia del núcleo familiar común entre agresor y ofendida, la agresión de parte del acusado en contra de su hermana y el resultado de esa agresión con lo cual se acreditó la existencia del delito y la responsabilidad del acusado. Así propuesta la inconformidad resulta insuficiente para considerar que postula una real controversia. La razón es simple sus argumentos coinciden plenamente con los expuestos en la providencia. Así, el factor diferenciador entre esta y el recurso, que se centra en la antijuridicidad material de la conducta, no fue objeto de controversia. Más claro, el censor debió

1 Radicado N.º 41246 de 2014, Corte suprema de Justicia. Sala de Casación Penal.

explicar de manera razonada por qué la decisión del a quo, en punto a la inexistencia de la antijuridicidad material, era equivocada y por qué Danny Leandro Sánchez con su actuar vulneró el bien jurídico de la armonía doméstica y la unidad familiar. Esta omisión dejó al Tribunal sin elementos que deban ser confrontados entre sí para elegir uno de ellos como el acertado.

Se insiste: no puede pregonarse en el caso *sub examine* la presencia de una real controversia, tan solo la persistencia en un argumento que ya fue descartado. Frente a tal realidad, no le queda otra alternativa a esta Sala que declarar desierto el recurso por indebida sustentación, pues no se entregaron los fundamentos necesarios por los cuales el inconforme considera que el juez incurrió en errores jurídicos y probatorios para adoptar su determinación.

En virtud de lo expuesto, **la Sala Decimosegunda de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín,** administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **DECLARA DESIERTO** el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal 166 Local en contra de la sentencia absolutoria emitida por el Juez 2º Penal Municipal con Funciones Mixtas de Itagüí, Antioquia, el pasado 26 de julio de 2024, por indebida sustentación.

Esta decisión se notifica en estrados. Contra ella procede el recurso de reposición.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ENRIQUE RESTREPO MÉNDEZ
MAGISTRADO

GABRIEL FERNANDO ROLDÁN RESTREPO
MAGISTRADO

JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ CALLE
MAGISTRADO

Firmado Por:

Luis Enrique Restrepo Méndez
Magistrado
Sala Penal
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Gabriel Fernando Roldan Restrepo
Magistrado
Sala Penal
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jose Ignacio Sanchez Calle
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 014 Penal
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ab22ff4a1e3664d1457caf6faa8919781d88c988525bed9bab48ed67130a831a**
Documento generado en 18/09/2024 01:32:33 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica